

Se aprueban Leyes y Reformas Legales en Materia de Combate a la Corrupción

Julio 2016

Autores: Vicente Corta Fernández, María Teresa Fernández Labardini, Ismael Reyes Retana Tello, Enrique Espejel Caso, Manuel Groenewold Ortiz-Mena

Derivado de la histórica reforma constitucional que en el mes de mayo de 2015, creó el Sistema Nacional Anticorrupción ("SNA"), en días pasados el Congreso de la Unión aprobó un paquete legislativo con el propósito de completar el andamiaje legal que dotará de eficacia a las estrategias y políticas públicas para el combate a la corrupción e impunidad. Las leyes del SNA tienen como objetivo lograr la plena coordinación de los esfuerzos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir, investigar, y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción en los que intervengan, tanto funcionarios públicos, como empresas y particulares.

Para el funcionamiento del SNA, el Poder Legislativo aprobó nuevas leyes como la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. También aprobó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal -en materia de control interno del Ejecutivo Federal-, a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

El presente documento tiene como finalidad describir, en términos generales, los aspectos que se consideran más relevantes de las leyes secundarias y demás reformas recientemente aprobadas por el Congreso de la Unión y que integran el marco legal en materia de combate a la corrupción en México.

I. Ley General de Responsabilidades Administrativas

La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor de la citada Reforma, mientras tanto continuará aplicándose la legislación actualmente vigente en materia de responsabilidades administrativas, en el ámbito federal y de entidades federativas.

Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, quedarán abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

1. **Objeto y contenido general** – Es distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones

aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.

De conformidad con lo anterior, la Ley General de Responsabilidades Administrativas se divide en dos libros: el Libro Primero, sobre Disposiciones Sustantivas y el Libro Segundo, sobre Disposiciones Adjetivas.

2. **Sujetos de la ley** – Anteriormente, los únicos sujetos a Responsabilidades Administrativas, eran los servidores públicos. Ahora, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas también se prevé un régimen de responsabilidades para particulares vinculados con faltas administrativas graves.
3. **Autoridades competentes para su aplicación** – Son autoridades facultadas para aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas: (i) la Secretaría de la Función Pública (“SFP”) y sus homólogos en las entidades federativas; (ii) los Órganos Internos de Control (“OIC”); (iii) la Auditoría Superior de la Federación (“ASF”) y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas; (iv) la sección competente en materia de responsabilidades administrativas de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o las salas especializadas que, en su caso, se establezcan en dicha materia, así como las homólogas de entidades federativas (el “Tribunal”); (v) tratándose de las responsabilidades administrativas de los poderes judiciales, serán la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal y los poderes judiciales estatales y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y (iv) las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado.
4. **Política de integridad de las personas morales** – En la determinación de la responsabilidad de los particulares, tratándose de las personas morales a que se refiere esta ley, se valorará si cuentan con una política de integridad, la cual deberá de contar, en términos generales, al menos, con los siguientes elementos: (i) un manual de organización y procedimientos; (ii) un Código de Conducta; (iii) sistemas de control, vigilancia y auditoría; (iv) sistemas de denuncia, así como procesos disciplinarios; (v) sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación de las medidas de integridad; (vi) políticas de recursos humanos, y (vii) mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses.
5. **Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal** – Todos los servidores públicos estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante la SFP o sus homólogas en las entidades federativas en los siguientes supuestos: (i) toma de posesión de su encargo; (ii) cada año, y (iii) conclusión de su encargo. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual. Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

La SFP o sus homólogas en las entidades federativas, así como los OIC estarán facultados para auditar la evolución del patrimonio de los declarantes. En caso en que las declaraciones reflejen un incremento no justificable, se procederá a integrar un expediente para formular la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

6. **Protocolo de actuación en contrataciones y formatos del manifiesto de vínculos o posibles conflictos de interés de los particulares** – El Comité Coordinador del SNA expedirá el protocolo de actuación en contrataciones, el cual será implementado por la SFP, sus homólogas en las entidades federativas y los OIC. El protocolo mencionado en el párrafo anterior deberá ser cumplido por los servidores públicos inscritos en la Plataforma Digital Nacional y, en su caso, aplicarán los formatos que se utilizarán para que los particulares formulen un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles conflictos de interés.

Al respecto, también se señala que es obligación de los servidores públicos cerciorarse, antes de la celebración de contratos, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente, no se actualiza conflicto de interés.

7. **Declaración de intereses y conflictos de interés** – La declaración de intereses tendrá por objeto informar y determinar el conjunto de intereses de un servidor público a fin de delimitar cuándo éstos entran en conflicto de interés y estarán obligados a su presentación, todos los servidores públicos que

deban presentar la declaración patrimonial, y en los mismos plazos en los que deba presentarse esta última.

Se define como conflicto de interés la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios. La actuación bajo conflicto de interés de un servidor público, es considerada una falta administrativa grave.

- 8. Faltas administrativas no graves de los servidores públicos** – En términos generales, las obligaciones cuyo incumplimiento por parte de los servidores públicos se considera falta administrativa no grave, son las siguientes: **(i)** cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas; **(ii)** denunciar actos u omisiones que llegare a advertir, que puedan constituir faltas administrativas; **(iii)** atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público; **(iv)** presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses; **(v)** registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación que se encuentre bajo su responsabilidad y evitar su divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos; **(vi)** supervisar a los servidores públicos sujetos a su dirección; **(vii)** rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones; **(viii)** colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sean parte, y **(ix)** cerciorarse, antes de la celebración de contratos, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que su celebración no representa un conflicto de interés.

También se considera falta administrativa no grave, los daños y perjuicios que, de manera culposa o negligente, sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves, cause el servidor público a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de un ente público. Los entes públicos o los particulares que, en términos de lo señalado en el párrafo anterior, hayan recibido recursos públicos sin tener derecho a los mismos, deberán reintegrarlos. En caso de no realizarse el reintegro de los recursos, estos serán considerados créditos fiscales.

- 9. Sanciones por faltas administrativas no graves de los servidores públicos** – En los casos de responsabilidades administrativas no graves, la SFP o el OIC impondrán una o más de las sanciones administrativas siguientes: **(i)** amonestación pública o privada; **(ii)** suspensión del empleo cargo o comisión, de uno a treinta días naturales; **(iii)** destitución del empleo, cargo o comisión y **(iv)** inhabilitación temporal, la cual no será menor de tres meses ni podrá exceder de un año, para desempeñarse en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

La facultad de las autoridades para sancionar las faltas administrativas no graves, prescribirá en tres años.

- 10. Faltas administrativas graves de los servidores públicos** – Se consideran faltas administrativas graves de los servidores públicos, en los términos establecidos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las siguientes: **(i)** cohecho; **(ii)** peculado; **(iii)** desvío de recursos públicos; **(iv)** utilización indebida de información; **(v)** abuso de funciones; **(vi)** actuación bajo conflicto de interés; **(vii)** contratación indebida; **(viii)** enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés; **(ix)** tráfico de influencias; **(x)** encubrimiento; **(xi)** desacato, y **(xii)** obstrucción de justicia.

Como Anexo se acompañan las definiciones de las faltas administrativas graves a que se refiere el párrafo anterior.

- 11. Sanciones por faltas administrativas graves de los servidores públicos** – Las faltas administrativas que imponga el Tribunal a los servidores públicos por faltas administrativas graves, consistirán en una o más de las sanciones siguientes: **(i)** suspensión del empleo de treinta a noventa días naturales, **(ii)** destitución del empleo, **(iii)** sanción económica, y **(iv)** inhabilitación temporal en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez años, si el monto de afectación de la falta administrativa grave no excede de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (la cual, en el 2016 tiene un valor diario de \$73.04), y de diez a veinte años, si dicho monto excede del límite señalado. Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro, se podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación.

La facultad de las autoridades para sancionar las faltas administrativas graves de los servidores públicos, prescribirá en siete años.

- 12. Sanción por faltas administrativas graves de los servidores públicos cuando la falta le genere beneficios económicos** – En el caso en que la falta administrativa grave cometida por el servidor público le genere beneficios económicos, así como a su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios o para socios o sociedades en las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte, se le impondrá sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos. En ningún caso la sanción económica podrá ser menor o igual al monto de dichos beneficios.

El Tribunal determinará el pago de una indemnización cuando la falta administrativa grave provoque daños y perjuicios a la Hacienda Pública federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos.

- 13. Responsabilidad solidaria de las personas que también hayan obtenido beneficios económicos indebidos** – En caso de que el servidor público haya cometido una falta que le genere beneficios económicos por la cual se le determine el pago de una indemnización conforme a lo señalado en el numeral inmediato anterior, las demás personas que también hayan obtenido un beneficio indebido, serán solidariamente responsables. Es decir, en caso de que un servidor público obtenga beneficios económicos que resulten de la comisión de una falta, el pago de la indemnización también se podrá exigir a cualquier otra persona que hubiere obtenido los beneficios.

- 14. Actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves** – Los actos de particulares que se consideren vinculados a faltas administrativas graves son los siguientes: **(i)** soborno; **(ii)** participación ilícita en procedimientos administrativos; **(iii)** tráfico de influencias; **(iv)** utilización de información falsa; **(v)** obstrucción de facultades de investigación; **(vi)** colusión en materia de contrataciones públicas; **(vii)** uso indebido de recursos públicos, y **(viii)** contratación indebida de ex servidores públicos con menos de un año de antigüedad de abandonar el encargo.

Como Anexo se acompañan las definiciones de los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves a que se refiere el párrafo anterior.

La facultad de las autoridades para sancionar actos de particulares que se consideran vinculados a faltas administrativas graves, será de siete años.

- 15. Sanciones a personas físicas por actos vinculados con faltas administrativas graves** – Las sanciones consistirán en una o más de las siguientes: **(i)** sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos o, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de cien hasta ciento cincuenta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (la cual, en el 2016 tiene un valor diario de \$73.04); **(ii)** inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, según corresponda, por un periodo que no será menor a tres meses ni mayor a ocho años; **(iii)** indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos.

- 16. Sanciones a personas morales por actos vinculados con faltas administrativas graves** – Las sanciones consistirán en una o más de las siguientes: **(i)** sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de mil hasta un millón quinientas mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (la cual, en el 2016 tiene un valor diario de \$73.04); **(ii)** inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, por un periodo que no será menor a tres meses ni mayor de diez años; **(iii)** la suspensión de actividades, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor a tres años; **(iv)** disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal de una persona moral; **(v)** indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública federal, local o municipal o al patrimonio de los entes públicos.

Las sanciones señaladas en los incisos iii y iv del párrafo anterior, sólo serán procedentes cuando la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves.

17. Actos realizados por los representantes legales de la persona moral – Las personas morales serán sancionadas cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por las personas físicas que actúen a su nombre o representación y pretendan obtener mediante tales conductas, beneficios para dichas personas morales.

18. Faltas de particulares en situación especial – Son aquellas realizadas por candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de campaña electoral o de transición entre administradores del sector público, y líderes de sindicatos del sector público que impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir o pretender recibir algún beneficio, ya sea para sí o para su campaña electoral, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro caso de obtener el carácter de servidor público.

Las sanciones por faltas de particulares en situación especial son las mismas que las aplicables por los actos de particulares vinculados con faltas graves.

19. Colaboración en investigaciones y confesión de responsabilidad – Se considerará como atenuante en la imposición de sanciones a personas morales cuando los órganos de administración, representación, vigilancia o los socios de las personas morales denuncien o colaboren en las investigaciones proporcionando la información y los elementos que posean, resarzan los daños que hubieren causado.

El servidor público que haya realizado una falta administrativa grave o los particulares vinculados a faltas administrativas graves, o bien que se encuentren participando en su realización, podrán confesar su responsabilidad con el objeto de acogerse al beneficio de reducción de sanciones, el cual tendrá por efecto una reducción de entre el cincuenta y el setenta por ciento del monto de las sanciones que se impongan al responsable, y de hasta el total del monto de las sanciones. Lo anterior es aplicable tratándose de la inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamiento, servicios u obras públicas, por faltas de particulares.

Sin perjuicio de lo anterior, tal como se mencionó en el numeral 12, la ley establece que la sanción económica por faltas administrativas graves de los servidores públicos, cuando les generen un beneficio económico, en ningún caso podrá ser menor o igual al monto de los beneficios económicos obtenidos.

20. Disposiciones adjetivas – En adición a las disposiciones sustantivas en relación con los conceptos anteriormente expuestos, también se establecen disposiciones adjetivas; es decir, aquellas en las que se establecen las reglas de los procedimientos para la imposición de sanciones administrativas. En términos generales, las disposiciones adjetivas establecen el marco legal al cual se sujetará: (i) la investigación y calificación de las faltas graves y no graves, y (ii) el procedimiento de responsabilidad administrativa, que comprende reglas aplicables al procedimiento de responsabilidad administrativa ante la SFP o instancias homologas, encargadas del control interno de las entidades federativas, así como las reglas del procedimiento de responsabilidad administrativa ante los Tribunales, y disposiciones comunes para ambos casos.

21. Inicio de la Investigación de presuntas responsabilidades administrativas – La investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes.

22. Acceso a información confidencial o información protegida por disposiciones en materia de secrecía – Las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión a aquella que las disposiciones en la materia consideren con carácter reservada o confidencial, siempre y cuando se relacione con la comisión de infracciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. No serán oponibles disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal, bursátil, fiduciario o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro o inversión de recursos monetarios.

23. Obligación de atender requerimientos de información – Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que sean sujetos de investigación por presuntas irregularidades cometidas en ejercicio de sus funciones, deberán atender los requerimientos que, debidamente fundados y motivados, les formulen las autoridades investigadoras, para lo cual se otorgará un plazo de cinco hasta quince días hábiles, el cual podrá ser ampliado.

En la ley se establecen las medidas que las autoridades investigadoras podrán utilizar para hacer cumplir sus determinaciones, tales como multas, arrestos y auxilio de la fuerza pública.

- 24. Informe de presunta responsabilidad administrativa e inicio del procedimiento de responsabilidades administrativas** – Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras procederán al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que se consideren falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave.

Una vez calificada la conducta, se incluirá la misma en un Informe de Responsabilidad Administrativa y se presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa.

El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando las autoridades substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

II. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

- 1. Sistema Nacional Anticorrupción** – Se define por la Constitución como la instancia de coordinación de autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como fiscalización y control de recursos públicos.

El SNA tiene como objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes.

- 2. Integración del SNA:** (i) el Comité Coordinador; (ii) el Comité de Participación Ciudadana; (iii) el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, y (iv) los Sistemas Locales.

- a. Comité Coordinador** – Es la instancia responsable de establecer los mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema y tiene el encargo de diseñar, promocionar y evaluar las políticas públicas de combate a la corrupción.

Este comité se integra por un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá; los titulares de la ASF, de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, de la SFP; un representante del Consejo de la Judicatura Federal; el Presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Presidente del Tribunal.

La asistencia técnica y la generación de insumos necesarios para que el Comité Coordinador lleve a cabo sus funciones, estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva, la cual es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión. La generación de los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador genere sus funciones, la realizará la Comisión Ejecutiva, la cual, a su vez, se integra por: (i) el Secretario Técnico y (ii) el Comité de Participación Ciudadana, con excepción del miembro que funja en ese momento como Presidente del mismo.

- b. Comité de Participación Ciudadana** – Su objetivo es coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador y es la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas; está integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción.

- c. Sistemas Locales** – Se establecen las bases que deben atender las leyes de las entidades federativas para el desarrollo de la integración, atribuciones, y funcionamiento de los Sistemas Locales, entre las que se encuentran que: la integración y atribuciones deberán ser equivalentes a las del Sistema Nacional. Las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones normativas correspondientes, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del Decreto.

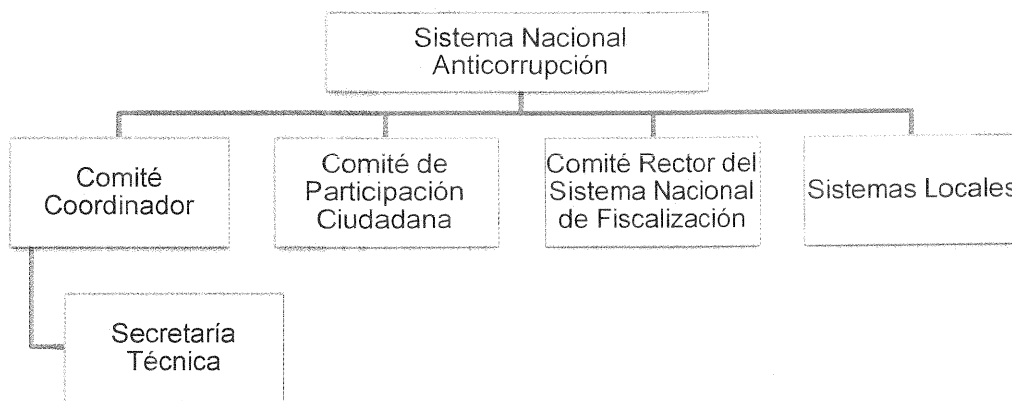
- 3. Sistema Nacional de Fiscalización** – Tiene como objeto establecer acciones y mecanismos de coordinación entre las autoridades fiscalizadoras, con el fin de promover el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar el desarrollo de fiscalización de recursos públicos.

El Sistema Nacional de Fiscalización contará con un Comité Rector, quien ejecutará las acciones para el ejercicio de las competencias del Sistema Nacional de Fiscalización en materia de fiscalización y control de los recursos públicos, conformado por: (i) la ASF; (ii) la SFP, y (iii) siete miembros rotatorios de entre las entidades de fiscalización superiores locales y las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades federativas.

4. **Plataforma Digital Nacional** – El Comité Coordinador emitirá las bases para el funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas por esta ley y por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La plataforma será administrada por la Secretaría Ejecutiva y estará conformada por la información que a ella incorporen las autoridades integrantes del Sistema, incluyendo, entre otras, el sistema electrónico de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal de los Servidores Públicos, así como a los servidores públicos y particulares sancionados.

El siguiente diagrama ilustra la integración del SNA:



III. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. A partir de su entrada en vigor, se abroga la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

El Tribunal conocerá de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves promovidas por la SFP, los OIC de los entes públicos federales o por la ASF, para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. En relación con este último punto, se señala que el Tribunal tiene facultad para fincar a los responsables el pago de las cantidades por concepto de responsabilidades resarcitorias.

El Tribunal conocerá de los asuntos en materia de responsabilidades administrativas a través de las Salas Especializadas creadas para dicho efecto, las cuales estarán adscritas a la Sección Tercera de la Sala Superior, misma que se constituye como la sección competente para conocer de responsabilidades administrativas.

La SFP, los órganos internos de control de los entes públicos federales, o la ASF podrán interponer el recurso de revisión ante los Tribunales Colegiados de Circuito en contra de las resoluciones definitivas que emita el Tribunal siguiendo el trámite establecido en la Ley de Amparo.

En este punto, si bien la Constitución en su artículo 104 no restringe la legitimación activa del recurso de revisión, el artículo 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas si lo hace de conformidad con lo anteriormente expuesto, excluyendo a los servidores públicos y particulares a quienes se les atribuya la falta administrativa. Sin embargo, se deja expedito su derecho para la promoción del juicio de amparo.

IV. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

En términos generales, se reincorpora la SFP a la lista de dependencias que forman parte del Poder Ejecutivo, a quien corresponde, en términos generales, entre otros asuntos, la organización y coordinación del sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; la inspección del ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y validar los indicadores de evaluación de la gestión gubernamental. El nombramiento del Secretario de la Función Pública deberá ser sometido por el Presidente de la República a ratificación del Senado de la República.

V. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

El Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Se abroga la actual Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

De la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, se destaca lo siguiente:

1. **Fiscalización de recursos públicos federales o participaciones federales** – La ASF podrá fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones o cualquier otro tipo de vehículo y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y Municipios, entre otras operaciones.

Se destaca que en la ley anterior, en la fiscalización de la Cuenta Pública, exceptuaba las participaciones federales.
2. **Entidades fiscalizadas** – La lista de las Entidades fiscalizadas incluye, en términos generales, a los entes públicos, a las entidades de interés público distintas a los partidos políticos, cualquier tipo de figura jurídica que reciba recursos públicos federales o participaciones federales (por ejemplo, fideicomisos o mandatos), así como a cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que los reciba.
3. **Objeto de la Fiscalización de la Cuenta Pública** – La fiscalización de la Cuenta Pública, en términos generales, tiene por objeto: **(i)** evaluar los resultados de la gestión financiera; **(ii)** verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas; **(iii)** promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan derivado de las auditorías e investigaciones, así como dar vista a las autoridades competentes cuando detecte la comisión de faltas administrativas no graves para que continúen la investigación respectiva y promuevan la imposición de las sanciones que procedan, y **(iv)** las demás que formen parte de la fiscalización de la Cuenta Pública o de la revisión del cumplimiento de los programas federales.

Asimismo, las observaciones que, en su caso, emita la ASF derivado de la fiscalización superior, podrán derivar en: **(i)** acciones y previsiones, incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, informes de presunta responsabilidad administrativa, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y denuncias de juicio político, y **(ii)** recomendaciones.
4. **Promoción de responsabilidades administrativas** – La ASF cuenta con la atribución de promover responsabilidades administrativas, para lo cual la Unidad Administrativa a cargo de las investigaciones de la ASF presentará el informe de presunta responsabilidad administrativa correspondiente, ante la autoridad substanciadora de la misma ASF, para que ésta, de considerarlo prudente, turne y presente el expediente ante el Tribunal o, en el caso de las faltas no graves, ante el OIC.
5. **Atribuciones de la ASF en materia de requerimientos de información** – Los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos federales o participaciones federales, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la ASF para efectos de sus auditorías e investigaciones.

Asimismo, la ASF cuenta con la facultad de requerir a terceros que hubieran contratado con las entidades fiscalizadas obra pública, bienes o servicios mediante cualquier título legal y a cualquier entidad o persona física o moral, pública o privada, o aquellas que hayan sido subcontratadas por terceros, la información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de recursos públicos a efecto de realizar las compulsas correspondientes.

Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la ASF puede solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación que a su juicio sea necesaria para llevar a cabo la auditoría correspondiente, sin importar el carácter de confidencial o reservado de la misma.

6. **Informe General a la Cámara de Diputados** – La ASF tendrá un plazo que vence el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública para rendir el Informe General a la Cámara de Diputados. El Informe General contendrá, entre otros, un resumen de las auditorías y observaciones realizadas, las áreas clave con riesgo identificadas en la fiscalización y un resumen de los resultados de la fiscalización del gasto federalizado, participaciones federales y la evaluación de la deuda fiscalizable.
7. **Informes Individuales de Auditoría** – Los informes individuales de auditoría que concluyan durante el periodo respectivo deberán ser entregados a la Cámara de Diputados, el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública. Los Informes Individuales de Auditoría contendrán, entre otros, los resultados de la fiscalización efectuada y las observaciones, recomendaciones, acciones, con excepción de los informes de presunta responsabilidad administrativa, y en su caso denuncias de hechos, así como una síntesis de las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado.

Es importante mencionar que, con independencia de las sanciones administrativas a las que se hace mención en este documento, cuando las faltas llegaren a tipificar un delito, se procederá contra quienes lo cometieren, con arreglo a lo dispuesto en la legislación penal aplicable. Al respecto, se señala que las reformas del marco legal en materia de combate a la corrupción también incluyeron modificaciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para, en términos generales, establecer las competencias, facultades y límites de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción. Dicha fiscalía gozará de independencia técnica y operativa para investigar, prevenir y conocer de los delitos en la materia y contará con agentes del Ministerio Público especializados en el combate a los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción. También podrá requerir a las instancias de gobierno la información que resulte útil o necesaria para sus investigaciones, la que por ningún motivo le podrá ser negada, incluso anteponiendo el secreto bancario, fiduciario o cualquiera otro de similar naturaleza. Finalmente, se señala que también se realizaron modificaciones al Código Penal Federal.

Para cualquier duda en relación con el contenido del marco legal en materia de combate a la corrupción, White & Case se pone a su disposición.

White & Case, S.C.
Torre del Bosque - PH
Blvd. Manuel Ávila Camacho #24
11000 Ciudad de México
Mexico

T +52 55 5540 9600

In this publication, White & Case means the international legal practice comprising White & Case LLP, a New York State registered limited liability partnership, White & Case LLP, a limited liability partnership incorporated under English law and all other affiliated partnerships, companies and entities.

This publication is prepared for the general information of our clients and other interested persons. It is not, and does not attempt to be, comprehensive in nature. Due to the general nature of its content, it should not be regarded as legal advice.

Anexo

I. Definición de las faltas administrativas graves de los servidores públicos

1. **Cohecho** - Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.
2. **Peculado** - Cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere el artículo anterior, de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.
3. **Desvío de recursos públicos** - Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.
4. **Utilización indebida de información** - Incurrirá en utilización indebida de información el servidor público que adquiera para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio privado, como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento.

Para efectos de lo anterior, se considera información privilegiada la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y que no sea del dominio público.

5. **Abuso de funciones** - Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte, o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público.
6. **Actuación bajo conflicto de interés** - Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal.

Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, el servidor público informará tal situación al jefe inmediato o el órgano que determine las disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitando sea excusado de participar en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de los mismos.

Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al servidor público, a más tardar 48 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión, los casos en que no sea posible abstenerse de intervenir en los asuntos, así como establecer instrucciones por escrito para la atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva de dichos asuntos.

7. **Contratación indebida** - Será responsable de contratación indebida el servidor público que autorice cualquier tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o designación, de quien se encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o inhabilitado para realizar contrataciones con los entes públicos, siempre que en el caso de las inhabilitaciones, al momento de la autorización, éstas se encuentren inscritas en el sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional.

-
8. **Enriquecimiento oculto** - Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto de Interés el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable, o un Conflicto de Interés.
 9. **Tráfico de influencias** - Cometerá tráfico de influencias el servidor público que utilice la posición de su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.
 10. **Encubrimiento** - Será responsable de encubrimiento el servidor público que cuando en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir Faltas administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento.
 11. **Desacato** - Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente, proporcione información falsa, así como no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables.
 12. **Obstrucción de la justicia** - Los servidores públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución de las Faltas administrativas incurrirán en obstrucción de la justicia cuando:
 - I. Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la investigación de actos u omisiones calificados como graves en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables;
 - II. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente, dentro del plazo de treinta días naturales, a partir de que tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una Falta administrativa grave. Faltas de particulares o un acto de corrupción, y
 - III. Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los preceptos establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Para efectos de la fracción anterior, los servidores públicos que denuncien una Falta administrativa grave o Faltas de particulares, o sean testigos en el procedimiento, podrán solicitar medidas de protección que resulten razonables. La solicitud deberá ser evaluada y atendida de manera oportuna por el Ente público donde presta sus servicios el denunciante.

II. Definición de los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves

1. **Soborno** - Incurrirá en soborno el particular que prometa, ofrezca o entregue cualquier beneficio indebido, a que se refiere el delito de cohecho, a uno o varios servidores públicos, directamente o a través de terceros, a cambio de que dichos servidores públicos realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público, o bien, abusen de su influencia real o supuesta, con el propósito de obtener o mantener, para sí mismo para un tercero, un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del beneficio o del resultado obtenido.
2. **Participación ilícita en procedimientos administrativos** - Incurrirá en participación ilícita en procedimientos administrativos el particular que realice actos u omisiones para participar en los mismos sean federales, locales o municipales, no obstante que por disposición de ley o resolución de autoridad competente se encuentren impedido o inhabilitado para ello.

También se considera participación ilícita en procedimientos administrativos, cuando un particular intervenga en nombre propio pero en interés de otra u otras personas que se encuentren impedidas o inhabilitadas para participar en procedimientos administrativos federales, locales o municipales, con la finalidad de que ésta o éstas últimas obtengan, total o parcialmente, los beneficios derivados de dichos procedimientos. Ambos particulares serán sancionados en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

-
3. **Tráfico de influencias** - Incurrirá en tráfico de influencias para inducir a la autoridad el particular que use su influencia, poder económico o político, real o ficticio, sobre cualquier servidor público, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja, o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público, con independencia de la aceptación del servidor o de los servidores públicos o del resultado obtenido.
 4. **Utilización de información falsa** - Será responsable de utilización de información falsa el particular que presente documentación o información falsa o alterada, o simulen el cumplimiento de requisitos o reglas establecidos en los procedimientos administrativos, con el propósito de lograr una autorización, un beneficio, una ventaja o de perjudicar a persona alguna.
 5. **Obstrucción de facultades de investigación** - Incurrirá en obstrucción de facultades de investigación el particular que, teniendo información vinculada con una investigación de Faltas administrativas, proporcione información falsa, retrase deliberada e injustificadamente la entrega de la misma, o no dé respuesta alguna a los requerimientos o resoluciones de autoridades investigadoras, substanciadoras o resolutorias, siempre y cuando le hayan sido impuestas previamente medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables.
 6. **Colusión** - Incurrirá en colusión el particular que ejecute con uno o más sujetos particulares, en materia de contrataciones públicas, acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones públicas de carácter federal, local o municipal.

También se considerará colusión cuando los particulares acuerden o celebren contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto o efecto sea obtener un beneficio indebido u ocasionar un daño a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos.

Cuando la infracción se hubiere realizado a través de algún intermediario con el propósito de que el particular obtenga algún beneficio o ventaja en la contratación pública de que se trate, ambos serán sancionados en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Las faltas referidas resultarán aplicables respecto de transacciones comerciales internacionales. En estos supuestos la Secretaría de la Función Pública será la autoridad competente para realizar las investigaciones que correspondan y podrá solicitar a las autoridades competentes la opinión técnica referida en el párrafo anterior, así como a un estado extranjero la información que requiera para la investigación y substanciación de los procedimientos a que se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en los términos previstos en los instrumentos internacionales de los que ambos estados sean parte y demás ordenamientos aplicables.

Para efectos de lo anterior, se entienden como transacciones comerciales internacionales, los actos y procedimientos relacionados con la contratación, ejecución y cumplimiento de contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios de cualquier naturaleza, obra pública y servicios relacionados con la misma; los actos y procedimientos relativos al otorgamiento y prórroga de permisos o concesiones, así como cualquier otra autorización o trámite relacionados con dichas transacciones, que lleve a cabo cualquier organismo u organización públicos de un estado extranjero o que involucre la participación de un servidor público extranjero y en cuyo desarrollo participen, de manera directa o indirecta personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

7. **Uso indebido de recursos públicos** - Será responsable por el uso indebido de recursos públicos el particular que realice actos mediante los cuales se apropie, haga uso indebido o desvíe del objeto para el que estén previstos los recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, cuando por cualquier circunstancia maneje, reciba, administre o tenga acceso a estos recursos.

También se considera uso indebido de recursos públicos la omisión de rendir cuentas que comprueben el destino que se otorgó a dichos recursos.

8. **Contratación indebida de ex servidores públicos** - Será responsable de contratación indebida de ex servidores públicos el particular que contrate a quien haya sido servidor público durante el año previo, que posea información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, y directamente permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus competidores. En este supuesto también será sancionado el ex servidor público contratado.